

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre veinte de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juez 2º suplente de Distrito de Puebla de Zaragoza por el C. Pedro J. Senties en favor de los CC. Pablo Urrutia y Rafael Cortés, jefe político el primero de Chalehicomula y el segundo de Tecali, contra el juez nato de Distrito del mismo Estado por los procedimientos de este en la causa que instruye á Urrutia y á Cortés por abusos electorales; y

Considerando: en primer lugar, que el C. Senties promovió el juicio sin acreditar representación legítima de los CC. Pablo Urrutia y Rafael Cortés; que por lo mismo no debió darse entrada al juicio, y que una vez dada, y apareciendo la falta de personalidad de quien lo promovió, no debió proseguirse el juicio.

Considerando en segundo lugar: que por la misma falta de personalidad del promovedor, no debió el juez 2º de Distrito mandar suspender el acto respecto del que se pidió amparo, tanto mas cuanto que no se trataba de un caso de notoria y positiva urgencia; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 de la Constitución federal y 2º de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta: que se confirma el auto pronunciado el ocho del actual por el juez 2º suplente de Distrito de Puebla de Zaragoza, solamente en la parte que manda sobreseer en este juicio; y que se reponga el papel comun y del sello quinto de que se ha usado en el propio juicio, y lo acordado.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden, con copia certificada de este auto para los efectos consignientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el tomo.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Supre-

ma de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada*.—*Pedro Ogazon*.—*Juan J. de la Garza*.—*José Arteaga*.—*J. M. Lafragua*.—*P. Ordaz*.—*M. Anza*.—*S. Guzmán*.—*L. Velazquez*.—*M. Zavala*.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Setiembre veintitres de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Puebla por el C. Juan Torres, alcalde 1º de Cholula, contra el gobernador del Estado, por violación de garantías en la persona del quejoso y en las que componen el ayuntamiento de Cholula.

EDICTAMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Seria cosa bien difícil decidir sobre la conveniencia de un recurso que tuviera por objeto corregir los abusos de la autoridad de cualquiera clase que fuera, pues no siendo fundadas todas las quejas, se impondría las mas veces una molestia inútil á las personas que ejercieran aquella. Pero es cosa extraña que el recurso de amparo que no es ya nuevo y cuya aplicacion es tan clara, aun se introduzca por pequeños motivos, contrariando el objeto de las sábias leyes que lo establecen.

El C. Juan Torres, presidente del ayuntamiento de Cholula, se queja de que en su persona se ha violado el derecho de petición que la Constitución otorga á todo ciudadano, y que la misma garantía se ha violado en su perjuicio, porque se le ha depuesto del cargo. El hecho es inexacto; una autoridad que obra con tal investidura, no se reputa como simple ciudadano, porque sus actos deben normarse por la

ley que reglamenta sus atribuciones, y ella misma sin duda, lo hace responsable por el modo de desempeñarlas.

La ley de amparo no tiene que ver con las autoridades de ninguna especie, puesto que con ese carácter no los concede la Constitucion garantía ninguna; y aunque la tuvieran, nunca el recurso presente estaria comprendido en la fraccion 1ª del art. 1º de dicha ley.

No importa que la Constitucion del Estado conceda á los ayuntamientos el derecho de iniciar las leyes, para que el C. Torres crea que esa concesion es una garantía individual, pues él mismo se persuadirá de que semejante supuesta garantía no la tiene como hombre, ni como ciudadano, sino como presidente del ayuntamiento de Cholula. En la Constitucion general se consignan los derechos del hombre y los del ciudadano, pero nada se dice de los que tengan ó dejen de tener los ayuntamientos.

Destituido ó suspenso de su cargo el quejoso, es seguro que se ha cometido contra él una injusticia y quizá una gran arbitrariedad; y aunque tambien es seguro que las leyes han de proveer de remedio á semejante abuso, dista algo de ser el que ha intentado, y que es á toda luz improcedente.

Y no lo es solo por defecto de forma, sino porque el caso no puede, ni por equidad, estar comprendido en la ley, pues no importa violacion de garantía individual, ni vulnera ó restringe la soberanía del Estado, ni invade la esfera de la autoridad federal; por consiguiente, no está comprendido en el art. 1º de la ley de 20 de Enero, que reglamenta el recurso que se ha promovido.

Por todos los fundamentos expuestos, y de entera conformidad con la ley citada, el promotor fiscal concluye pidiendo á la autoridad de vd. se sirva declarar, que no procede el recurso interpuesto por el C. Juan Torres, suspenso ó destituido del car-

go de presidente del ayuntamiento de Cholula.

Zaragoza, Agosto veintinueve de mil ochocientos setenta y uno. (Firmado.)—
Eugenio Sanchez.

Sentencia del Juzgado de Distrito.

Puebla, Setiembre cinco de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo promovido por el alcalde 1º de Cholula C. Juan Torres contra el C. gobernador del Estado, con motivo de que hubiera librado orden para que se le destituyera del cargo y se consignara al juez competente, lo mismo que á las demas personas que componen el H. ayuntamiento de ese lugar, solo porque secundando la invitacion del club del pueblo, mediante acuerdo pleno pidieran á la diputacion permanente, que se sirva convocar á la Legislatura á sesiones extraordinarias para ocuparse de las reformas constitucionales; y el escrito de queja; el informe producido con justificacion por la autoridad responsable; el parecer fiscal; y cuanto ha sido de verse y tenerse presente.

Considerando: que el promovente hace valer para que se le conceda el amparo por la justicia federal, el que la determinacion gubernativa vulnera en su perjuicio el art. 8º de la Constitucion de la República que establece la inviolabilidad del derecho de peticion ejercido por escrito de una manera pacífica y respetuosa, y la fraccion 2ª del art. 16 de la del Estado, estando en consecuencia comprendido el caso en la fraccion 1ª del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869. Que en el informe rendido por el C. gobernador se hace presente, que la orden ha librádose á causa de que, habiendo citado á cabildo extraordinario el alcalde 1º en acuerdo pleno se acordara el protestar contra las reformas constitucionales, lo que no ha podido menos que tenerse por un acto subversivo y sedicioso respecto de todos

los miembros del cuerpo municipal que suscribieron el acuerdo, sin que por lo mismo pueda tener lugar el recurso intentado, pues además de que ha estado en sus facultades el dar esa determinación, ella no podría dar derecho al C. Juan Torres para solicitar el amparo, con el carácter de funcionario público.

Que no deja duda el que la providencia positivamente ha dictádose, no contra de persona particular sino de un alcalde, con motivo de hechos en que ha obrado con ese carácter.

Que siendo introducido el juicio de amparo para favorecer exclusivamente á los individuos siempre que se violen en su perjuicio las garantías que les otorga la Constitución, según es de inferirse del tenor del art. 101 de la misma, y de la ley que lo reglamenta, y principalmente cuando en esta se previene que las sentencias de estos juicios debe ser tal que solo se ocupe de individuos particulares agraviados, es evidente que no puede hacerse extensivo á mas.

Que aun cuando la órden de destitucion y consignacion pudiera reputarse arbitraria ó atentatoria, ella solo podría dar derecho para formalizar acusacion en contra del que la dictó, mas no para pedir amparo y menos al existir ya ejecutorias de la Suprema Corte en negocios de igual naturaleza, en los que no ha concedido. Por cuyas consideraciones y de conformidad al parecer fiscal se declara: que la justicia de la Union no ampara al alcalde 1º de Cholula C. Juan Torres contra la determinacion del gobierno del Estado referente á que fuera destituido y consignado al juez competente para que se le juzgase, lo mismo, que á las demas personas que forman el ayuntamiento de ese Distrito y que suscribieron el acuerdo que ha tenido por subversivo y sedicioso; y que con arreglo al art. 16 de la ley de 20 de Enero de 869, es de condenarse al pago de una multa, como se le condena en efecto al minimum que establece. Hágase saber; publíquese

por los periódicos esta sentencia y remítase el expediente á la Suprema Corte de Justicia con la copia de ella para su publicacion tambien en el Semanario Judicial. El C. juez de Distrito lo proveyó, mandó y firmó definitivamente, juzgando ante mí, de quo doy fé.—Antonio Rivera.—Ante mí.—Antonio Garcia Mosquera.”

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre veintidos de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Puebla, por el C. Juan Torres alcalde 1º del ayuntamiento de Cholula contra el gobernador del Estado, por haberlo suspendido de sus funciones municipales, consignándolo al juez ordinario, estimando edicioso un acuerdo que firmó el promovente en su calidad de alcalde 1º del referido ayuntamiento; alegando que, con esta providencia se violan las garantías que otorga el art. 8º de la Constitución de la República y los artículos 16 y 38 de la del Estado. Vistas las constancias de autos, y

Considerando: que el C. gobernador de Puebla decretó la suspension del alcalde 1º del ayuntamiento de Cholula y la consignacion á los tribunales ordinarios, por un acuerdo que estimó edicioso, refiriéndose al funcionario público por un hecho verificado en virtud de su oficio; por lo que dicha providencia no importa violacion alguna de las garantías individuales alegadas por Torres en su escrito de demanda.

Considerando; que si la providencia del C. gobernador de Puebla no es conforme á derecho, el peticionario tiene los suyos á salvo, en uso del que cree asistirle; puede hacerlos valer ante los tribunales competentes, en la via y forma prescritas por las leyes; con tales fundamentos se declara:

Que es de confirmarse y se confirma la

sentencia que el juzgado de Distrito de Puebla pronunció el 5 de Setiembre, solo en la parte que dice: "la justicia de la Union no ampara ni protege al C. alcalde 1º de Cholula C. Juan Torres, contra la determinacion del gobernador del Estado, referente á que fuera separado de su encargo y consignado al juez competente para que se le juzgue."

Devuélvase sus actuaciones al juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos correspondientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron. — *S. Lerdo de Tejada.* — *Pedro Ogazon.* — *Juan J. de la Garza.* — *José Arceaga.* — *J. M. Lafragua.* — *P. Ordaz.* — *S. Guzman.* — *L. Velazquez.* — *M. Zavala.* — *José García Ramírez.* — *Luis Mº Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Setiembre veintitres de mil ochocientos setenta y uno. — *Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Sinaloa por los Sres. F. de la Vega y Cº, contra una providencia del C. tesorero general del Estado que los obliga á pagar el derecho de mercado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El Promotor fiscal dice:

Después de examinar los fundamentos en que se apoya la solicitud de amparo hecha por los Sres. F. de la Vega y Cº á consecuencia del cobro que los hace el tesorero general del Estado por el derecho de tanto por bulto impuesto por el decreto de 31 de

Enero de 1870, encuentra que ninguno de ellos es conforme con nuestra Constitucion y leyes vigentes.

En primer lugar, el referido decreto de 31 de Enero no grava la importacion de efectos extranjeros, que es lo que terminantemente prohíbe la Constitucion federal, sino á los efectos nacionalizados que han sido importados en otro Estado y que se traen al de Sinaloa para su comercio interior.

En segundo lugar, este derecho que el mismo decreto llama de mercado, está en las atribuciones del gobierno que lo creó y de ninguna manera invade la esfera de la autoridad federal, habiéndose comprendido por los solicitantes en las disposiciones de la fraccion 1º art. 112 de la Constitucion federal.

En tercer lugar, no se puede alegar en favor de la referida solicitud la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia que amparó á los Sres. Ibarra Dondé y Cº de Yucatan, puesto que allí se trataba de la ejecucion de una ley que impono á efectos extranjeros importados por el mismo Yucatan; y no á efectos nacionalizados importados por Guaymas y conducidos despues á este puerto.

El que suscribe confiesa, que en efecto, la imposicion de estos derechos puede causar algun desnivel en el comercio interior de Estado á Estado; pero mientras no se ataque directamente la ley que permite á estos la facultad de decretar cierta clase de impuestos, no puede ver la invasion de facultades en que se apoyan los peticionarios para impetrar el amparo de la justicia federal.

Debe decir tambien, que el C. tesorero del Estado no ha rendido el informe justificado que previene la ley, pues malamente puede darse este nombre al en que solo se reduce á decir que ejecutó lo dispuesto por el decreto del gobierno de 31 de Enero de 1870, cosa que ya sabiamos de antemano; y ni aun siquiera indica sobre qué bultos